



## **S E S I Ó N P Ú B L I C A NÚM. 51 O R D I N A R I A**

**MARTES 6 DE JUNIO DE 2017**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

En la Ciudad de México, siendo las once horas con cincuenta y seis minutos del martes seis de junio de dos mil diecisiete, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar sesión pública ordinaria, los señores Ministros Presidente Luis María Aguilar Morales, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

### **I. APROBACIÓN DE ACTA**

Se sometió a consideración el proyecto de acta de la sesión pública número cincuenta ordinaria, celebrada el lunes cinco de junio del año en curso.

Por unanimidad de once votos, el Tribunal Pleno aprobó dicho proyecto.

### **II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS**

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del martes seis de junio de dos mil diecisiete:





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
I. 15/2016  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Solicitud de sustitución de jurisprudencia 15/2016, solicitada por el Pleno del Décimo Primer Circuito, respecto de las jurisprudencias P./J. 13/2015 (10a) y P./J. 14/2015 (10a), emitidas por este Alto Tribunal al resolver la contradicción de tesis 221/2014. En el proyecto formulado por el señor Ministro Eduardo Medina Mora I. se propuso: *“PRIMERO. Es procedente la solicitud de sustitución de jurisprudencia formulada por el Pleno del Décimo Primer Circuito. SEGUNDO. Es infundada la solicitud de sustitución de jurisprudencia a que se refiere esta resolución”*.

El señor Ministro ponente Medina Mora I. solicitó retirar el asunto para reformularlo en cuanto: 1) la legitimación, en razón de que el Pleno del Circuito hizo suya —por unanimidad— una petición de un tribunal colegiado auxiliar, es decir, propiamente no forma parte de dicho Pleno, y 2) que, para sustituir estas jurisprudencias, valdría la pena revisar el criterio jurisprudencial del Tribunal Pleno.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales acordó retirar el asunto de la lista.

El secretario general de acuerdos dio cuenta con el siguiente asunto de la lista:

## II. 290/2016

Incidente de inejecución de sentencia 290/2016, respecto de la dictada el veintiuno de enero de dos mil dieciséis por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, en apoyo a las labores del





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito, en el juicio de amparo directo 463/2015, promovido por [REDACTED]. En el proyecto formulado por el señor Ministro Eduardo Medina Mora I. se propuso: *“ÚNICO. Queda sin materia el incidente de inejecución de sentencia 290/2016, a que este toca se refiere”*.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del considerando de competencia, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro ponente Medina Mora I. presentó el considerando de estudio.

Indicó que el proyecto analiza el cumplimiento de la sentencia dictada en un juicio de amparo directo penal, mediante el cual se ordenó a la Sala Penal responsable dejar insubsistente la sentencia reclamada y emitir otra, en la que revoque la sentencia condenatoria de primera instancia, y ordene al juez de la causa reponer el procedimiento y dar vista al ministerio público a efecto de iniciar una investigación en torno a actos de tortura, en tanto que dicho juez debió ordenar la práctica oficiosa de exámenes psicológicos y médicos, de conformidad con el Protocolo de





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Estambul, así como cualquier otro medio de convicción pertinente, y nulificar toda eficacia probatoria de los medios de convicción obtenidos mediante tortura: la declaración del inculpado, el dictamen de lesiones, de intoxicación etílica, el dictamen de datos de dactiloscopia y el dictamen químico, además de resolver la situación jurídica del quejoso.

Señaló que, posteriormente, el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito determinó que existía imposibilidad jurídica para cumplir la ejecutoria de amparo, puesto que no podían realizarse los exámenes correspondientes en términos de lo dispuesto en el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes —Protocolo de Estambul—.

El proyecto propone determinar que, aun cuando no es posible restituir las cosas al estado que guardaban, la realización de los exámenes es una condición necesaria para conocer la verdad, por lo que, si bien el Protocolo de Estambul puede servir como guía para determinar en cada caso indicios de la existencia de tortura, no es un parámetro normativo de aplicación obligatoria ni la única vía que permite comprobarlo, dado que hasta el momento no existen criterios unificados sobre cómo probar la tortura, de manera que no es posible considerar como una imposibilidad jurídica el hecho de que el quejoso se haya negado a someterse a las pruebas médicas correspondientes, como en el caso, en el que reiteradamente se negó a someterse a las pruebas.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Por tanto, el mero alegato de haber sufrido tortura no basta para determinar su existencia, por lo que se determina que no existe la imposibilidad descrita por el tribunal colegiado para cumplir con la sentencia de amparo. No obstante, como el quejoso ha quedado en libertad por razones distintas, en específico, la nulidad de pruebas derivadas de una detención arbitraria a la de la presunta comisión de actos de tortura y su secuela procesal dentro del proceso penal, se debe declarar sin materia el asunto.

El señor Ministro Cossío Díaz observó que las razones para declarar sin materia el asunto están contenidas en los párrafos ciento trece —“El Juzgado Cuarto Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Villahermosa, conforme a sus atribuciones y a la relación de los expedientes y los autos, determinó que no era factible tomar en cuenta esos elementos probatorios y por ende dictó sentencia absolutoria”— y ciento catorce —“Por tanto, el presente incidente debe declararse sin materia, toda vez que ha concluido el proceso penal y el quejoso se encuentra en libertad por determinación de una sentencia absolutoria”— del proyecto, con los cuales coincidió.

No obstante, manifestó preocupación por los pronunciamientos de los párrafos del setenta y dos al ciento ocho, alusivos al Protocolo de Estambul, dado que no son compatibles con la doctrina de la Primera Sala, máxime que esos planteamientos generales y particulares de la tortura no son convenientes para el estudio y desarrollo del proyecto,





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

aun cuando se genere un precedente aislado por este Tribunal Pleno. Por esa razón, sugirió suprimir estos párrafos.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea coincidió con el señor Ministro Cossío Díaz en que resultan suficientes los párrafos ciento trece y ciento catorce para dejar sin materia el asunto, por lo que respaldó la sugerencia de eliminar los otros párrafos invocados, porque generan distorsión a la doctrina de la Primera Sala, además de que no son indispensables para el tema central que soluciona el caso.

La señora Ministra Piña Hernández concordó con los señores Ministros que le antecedieron en el uso de la palabra, en razón de que la sentencia previó la aplicación del Protocolo de Estambul, por lo que es innecesario analizar si tiene fuerza vinculante o no.

Expresó la duda consistente en que, si el párrafo ciento once indica que “El juzgador determinó dictar auto de libertad al inculpado, debido a la existencia de pruebas insuficientes para procesar al presunto responsable, sin hacer referencia en momento alguno a la denuncia de tortura que fue presentada, ni sus resultados” y la propuesta es dejar sin materia por sentencia absolutoria, debería valorarse si es conveniente dar congruencia a esta parte, que se refiere a un auto.

Adelantó que, si se elimina la parte propuesta por los señores Ministros, estaría de acuerdo con el proyecto.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena precisó que, al ser un incidente de inejecución de sentencia, se debe revisar si la sentencia fue cumplida o no, siendo que los párrafos delimitados implican un pronunciamiento abstracto. Anunció que, si se acepta la propuesta de eliminación de los párrafos citados, estaría de acuerdo con el proyecto, expresando dudas sobre si en los resolutivos se debería revocar y declarar cumplida la sentencia.

La señora Ministra Luna Ramos recapituló que la sentencia ordenó realizar los exámenes que establece el Protocolo de Estambul pero, una vez repuesto el procedimiento, el indiciado no dejó que se le practicaran en tres ocasiones. Por ello, valoró que el proyecto dio cuenta de la imposibilidad en su cumplimiento.

Estimó que no se generaría ningún problema si se eliminan los párrafos propuestos por los señores Ministros integrantes de la Primera Sala, aun cuando, tras su revisión, no se contraponen con las tesis emitidas. Consideró que, en el caso, bastaría con decir que, conforme al Protocolo de Estambul, se necesita el consentimiento del indiciado para llevar a cabo las pruebas correspondientes, lo que no se dio y, por esa razón, se puede determinar la imposibilidad para cumplir lo ordenado en la sentencia y, consecuentemente, dejar sin materia el asunto.

Apuntó que no sería viable la sugerencia del señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena, en cuanto a que el punto resolutivo mencione que se cumplió la sentencia, puesto que





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

la razón de dejar sin materia es precisamente la imposibilidad para cumplirla.

El señor Ministro Pérez Dayán se inclinó en favor del sentido del proyecto; sin embargo, diferenció algunos aspectos.

Precisó que la imposibilidad jurídica para cumplir la sentencia del amparo, en el sentido de practicar los exámenes a efecto de determinar si hubo o no tortura, sucedió porque no se le puede obligar a su práctica, pues es subjetivo autorizar o no una invasión de esta especie; sin embargo, no obstante que ese fue el argumento principal de la demanda, el proyecto indica que además el asunto concluyó mediante una resolución intermedia, en la que, por falta de pruebas, consistió en un auto de libertad.

No obstante lo anterior, valoró que la única causa para considerar que el asunto ha quedado sin materia es la actitud del quejoso de no cumplir con la sentencia dictada. Por tanto, aun cuando el proyecto contempla como equivalentes a las dos razones puntualizadas, podría sostenerse si exclusivamente se determina que la ejecutoria no puede cumplirse por causas imputables al propio quejoso. Agregó que, no obstante esta consideración, la argumentación debe estar soportada con todas las disposiciones que componen el proyecto, esto es, no estaría con la eliminación de los párrafos sugeridos, puesto que no se podría admitir que, con una decisión jurisdiccional absolutoria, quedara pendiente un tema tan sensible como





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

continuar la investigación de la tortura en cuestión, independientemente del valor procesal que llegara a tener, inclusive, para efectos de una ulterior responsabilidad o daño patrimonial.

El señor Ministro Cossío Díaz distinguió entre tortura como cuestión procesal y como delito. Hizo hincapié en que no es tolerable ningún acto de tortura por las autoridades del país y, por ello, en las sentencias respectivas se propone un punto resolutivo que da vista al ministerio público para llevar a cabo la investigación correspondiente y, en su acaso, aplicar las sanciones conducentes.

En la especie, valoró que, si ya se absolvió al inculpado por la insubsistencia de las cuatro pruebas, no debería mantenerse la tramitación del juicio de amparo para averiguar el aspecto delictivo de la tortura, dado que se trata de un procedimiento distinto, el cual se prevé ordenar por cuerda separada.

Reiteró su propuesta de eliminar los párrafos que contienen pronunciamientos generales.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea subrayó la propuesta de eliminación de los párrafos aludidos, en tanto que la Primera Sala ha distinguido las dos vertientes de la tortura: como delito y como violación de derechos humanos en el procedimiento o proceso penal. La primera siempre se tendrá que investigar y, eventualmente, castigar.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Aclaró que, si en el caso concreto se propone dejar sin materia el incidente, no significa convalidar la tortura, dado que se prevé dar vista al ministerio público para que investigue el acto de tortura, no sólo por mandato constitucional, sino en cumplimiento a los compromisos internacionales del Estado Mexicano.

Señaló que la tortura, como violación al proceso, implica una investigación con estándares de prueba mucho más bajos, lo que trae como consecuencia, en caso de acreditarse, la nulidad o invalidez de las pruebas derivadas del acto de tortura; no obstante, si en un caso concreto — como el presente — existe una resolución absolutoria porque el caudal probatorio no fue suficiente, entonces no debe perseguirse el cumplimiento de la sentencia.

Recordó que, con anterioridad a que la Primera Sala fijara su criterio, si una persona alegaba tortura, se daba vista al ministerio público y, sólo cuándo se lograba la investigación y derivaba en una sentencia con los máximos estándares del proceso penal para acreditar la responsabilidad de una persona y la comisión de ese delito, entonces se podía invalidar la prueba. Apuntó que, a partir de ello, se diferenció entre los efectos procesales de la tortura y el delito en sí.

Explicó que, si una persona imputada de cometer actos de tortura ha sido absuelta, ese probable acto no causa efecto alguno en el proceso penal, por lo que se debe dejar sin materia el incidente de inejecución de sentencia, con





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Independencia de que se siga la investigación correspondiente por el aspecto delictivo de la tortura.

La señora Ministra Piña Hernández puntualizó que, desde la concesión del amparo, uno de los efectos de la sentencia fue dar vista al ministerio público para la prosecución de la tortura como delito y, otro, que se aplicara el Protocolo de Estambul para advertir si el supuesto acto de tortura conllevaba un impacto en el proceso.

Estimó que, en todo caso, el proyecto debería precisar que se dio vista al ministerio público, cuya investigación del delito de tortura se llevará por cuerda separada. Retomó que, respecto de la tortura como violación procesal del presente caso, el juez de distrito desestimó las pruebas mediante auto de libertad, no por sentencia absolutoria.

Recapituló que la primera parte del proyecto establece que no existe imposibilidad para cumplir con la sentencia de amparo; no obstante, da cuenta del dictado de la sentencia absolutoria y, entonces, propone dejar el asunto sin materia. Recordó haberse pronunciado en el sentido de que esta segunda razón era suficiente para sustentar el sentido del proyecto, sin necesidad de la primera por las posibles discrepancias que pudieran existir.

Externó duda de en qué sentido se pronunció el señor Ministro Pérez Dayán, pues se expresó en favor del primer argumento y en contra del segundo.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro Cossío Díaz señaló que en la página cuatro del proyecto se citó que “En sesión de veintiuno de enero de dos mil dieciséis, dicho Tribunal Colegiado dictó sentencia, resolviendo en los siguientes términos: ‘ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a [REDACTED] [REDACTED], en contra del acto reclamado a las autoridades señaladas, precisado (sic) y puntualizadas, respectivamente en el considerando primero de este fallo, para efecto de que la Sala Penal responsable: [...] B.2. Ordene de igual manera al juzgador, dar vista al Ministerio Público que corresponda, a fin de que inicie la investigación relativa en torno a los actos de tortura;’”, con lo que la impunidad por la comisión del delito de tortura se evita con ese resolutivo.

El señor Ministro Pérez Dayán recordó que este incidente de inejecución de sentencia llegó a esta Suprema Corte por decisión del tribunal colegiado, el cual estimó que no hay materia para continuarlo porque el propio quejoso no aceptó someterse a los exámenes, no por ningún otro resultado procesal; sin embargo, el proyecto da a entender que existe otra razón, como indican sus párrafos ciento tres —“Por lo que, al no poder probarse la tortura por decisión exclusiva de la persona que la denunció, el mero alegato de haberla sufrido no puede tener trascendencia alguna dentro del proceso penal”—, ciento seis —“Se trata de una sentencia de amparo cuyo cumplimiento se encontraba condicionado a una conducta de hacer por parte del quejoso, por lo que si la misma no se hace, se debe entender que la





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

protección concedida ha quedado sin efectos”— y ciento ocho —“Si bien, en el caso concreto, no existe la imposibilidad descrita por el Tribunal Colegiado para cumplir con la sentencia de amparo, este Pleno estima, que la misma deriva de que el quejoso ha quedado en libertad por razones distintas a la de la presunta comisión de actos de tortura y su secuela dentro del proceso penal”—.

Con lo anterior, concluyó que esas explicaciones del proyecto dan a entender que el incumplimiento de la sentencia deriva de que, no obstante que la autoridad intentó cumplirla, la actitud del propio quejoso no se lo permitió. Recalcó que dos órganos jurisdiccionales —el juez de distrito y el tribunal colegiado, en sus respectivos momentos— coincidieron en que fue la actitud del quejoso la que dio lugar a que no se haya cumplido una ejecutoria.

Por tanto, anunció que se quedaría con la razón por la que el tribunal colegiado mandó el presente incidente; no obstante, adelantó que, si prevalece la otra, coincidiría con la sugerencia de eliminar el estudio del Protocolo de Estambul.

La señora Ministra Luna Ramos diferenció entre la tortura como violación al procedimiento y como delito; en el caso, se trató de una detención ilegal con tortura, por lo que el tribunal colegiado resolvió, primero, ordenar al juez de la causa reponer el procedimiento a partir del cierre de la instrucción para dar vista al ministerio público a fin de que investigue si hubo actos de tortura o no como delito y, segundo, indicó al juez ordenar la práctica oficiosa de





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

exámenes psicológicos y médicos, de conformidad con el Protocolo de Estambul, para advertir si hubo o no tortura como violación procesal. En ese contexto, se dio cumplimiento al primer lineamiento al haberse dado esa vista al ministerio público para investigar el delito de tortura y, respecto del segundo, el propio inculpadó no permitió que le hicieran los análisis correspondientes al Protocolo de Estambul, por lo que el juez no pudo analizar pruebas para determinar si había o no tortura, pero llegó a la conclusión de que debía absolverlo por otras razones, mas ello no significa que el delito se quedará impune porque ya inició la investigación.

Por esas razones, estimó correcto el proyecto que declara sin materia el incidente de inejecución porque, por lo que hace a la vista, se está cumpliendo con lo establecido en la ejecutoria y, por lo de la práctica de las pruebas, no se puede forzar a la persona a esos exámenes, aunado a que la sentencia lo absolvió.

Finalmente, refrendó la sugerencia de los señores Ministros de la Primera Sala de eliminar el estudio del Protocolo de Estambul, pues implica un pronunciamiento ajeno al cumplimiento en cuestión.

El señor Ministro ponente Medina Mora I. modificó el proyecto para aclarar que se trata de una sentencia absolutoria, como se da cuenta en su párrafo treinta y cuatro, la cual se dictó tras diversos requerimientos al





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

inculcado para practicarse las pruebas conforme al Protocolo de Estambul.

Aclaró que es importante analizar si en el caso concreto existió o no tortura pues, en diversas ocasiones en los asuntos de la Segunda Sala, las personas que alegan tortura se niegan a practicarse lo previsto en el Protocolo de Estambul.

No obstante lo anterior, modificó el proyecto para eliminar las referencias a la naturaleza del Protocolo de Estambul. Recalcó que este Tribunal Pleno puede analizar los criterios de ambas Salas de esta Suprema Corte. Mantuvo el punto resolutivo que deja sin materia el presente incidente, dado que existió sentencia absolutoria y porque hubo negativa del inculcado a practicarse las pruebas correspondientes.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea reconoció que el Tribunal Pleno puede analizar cualquier tema, pero señaló que, para la solución de este caso concreto, no era necesario imprimir las consideraciones del Protocolo de Estambul porque, además de que, al ser muy abstractas, podrían confundir o chocar con la doctrina consolidada de la Primera Sala.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales consultó si se modificarían los párrafos del setenta y dos a ciento ocho del proyecto.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro ponente Medina Mora I. aclaró que se eliminaría cualquier consideración que se refiera a la naturaleza del Protocolo de Estambul y a su obligatoriedad, mas no lo ordenado por el tribunal colegiado, porque fue el motivo y materia de la sentencia de amparo.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta modificada del considerando de estudio, la cual se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz únicamente por lo que ve a considerar que el dictado de la sentencia absolutoria provoca que este incidente quede sin materia y en contra de los párrafos del setenta y dos al ciento ocho, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea únicamente por lo que ve a considerar que el dictado de la sentencia absolutoria provoca que este incidente quede sin materia y en contra de los párrafos del setenta y dos al ciento ocho, Pardo Rebolledo, Piña Hernández únicamente por lo que ve a considerar que el dictado de la sentencia absolutoria provoca que este incidente quede sin materia, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales. Los señores Ministros Cossío Díaz, Zaldívar Lelo de Larrea y Piña Hernández anunciaron sendos votos concurrentes. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena y Pardo Rebolledo reservaron su derecho de formular sendos votos concurrentes.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.

El secretario general de acuerdos dio cuenta con el siguiente asunto de la lista:

### III. 33/2017

Incidente de inejecución de sentencia 33/2017, respecto de la dictada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, con residencia en Mérida, Yucatán, en apoyo a las labores del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en el recurso de revisión R.A. 26/2016, promovido por [REDACTED]. En el proyecto formulado por el señor Ministro Eduardo Medina Mora I. se propuso: *"PRIMERO. Es fundado el incidente de inejecución de sentencia a que este toca se refiere. SEGUNDO. Queda inmediatamente separado de su cargo [REDACTED] actual Titular de la Delegación Venustiano Carranza de la Ciudad de México, por haber incumplido la sentencia pronunciada en el recurso de revisión 26/2016, derivado del juicio de amparo indirecto 38/2016. TERCERO. Consígnese a [REDACTED] actual Titular de la Delegación Venustiano Carranza de la Ciudad de México, ante el Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México en turno, por el desacato a una sentencia de amparo de acuerdo con lo previsto en la fracción XVI, del artículo 107, de la Constitución Federal, a fin de que sea juzgado y sancionado por la desobediencia cometida, en los términos*





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

previstos por el artículo 267 de la Ley de Amparo vigente.

*CUARTO. Para los efectos mencionados en la parte final del Considerando Tercero de esta resolución, déjese el presente incidente de inejecución de sentencia abierto y requiérase a la autoridad ahí señalada el cumplimiento a la ejecutoria de amparo en los términos especificados”.*

Asimismo, el secretario general de acuerdos informó que, en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo segundo del punto tercero del Acuerdo General 10/2013 del Pleno de esta Suprema Corte, se solicitaron datos al Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, sobre la reasunción de documentos relevantes presentado por las autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector del fallo protector o el dictado de algún proveído en el que se tenga por cumplida la sentencia emitida en el juicio de amparo 38/2016. En respuesta a ello, el referido órgano jurisdiccional remitió, a las diez horas con veintisiete minutos del día de hoy —vía correo electrónico—, copia del oficio en el que se transcribe el acuerdo de cinco de junio del presente año, donde se ordena hacer del conocimiento de este Alto Tribunal que, mediante diverso oficio de siete de abril del año en curso, el Magistrado Presidente de la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje remitió a ese juzgado copia certificada de diverso oficio, relativo al expediente laboral 6838/2010, de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, en el que, a su vez, el apoderado legal del órgano político administrativo en Venustiano Carranza informó a la referida Sala que mediante





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

diversos oficios de siete y veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, la Dirección General de Administración solicitó transformar la plaza respectiva, con efectos desde el uno de marzo del año en curso, con motivo de que esa desconcentrada no cuenta con la plaza que permita dar cumplimiento al requerimiento legal para otorgar el nombramiento en el puesto de base de educadora.

El señor Ministro ponente Medina Mora I. solicitó dejar en lista el asunto para analizar la comunicación a que refirió el secretario general de acuerdos y determinar sus alcances en el cumplimiento del fallo protector.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales prorrogó la discusión del asunto para una siguiente sesión, por lo que deberá mantenerse en lista.

Acto continuo, levantó la sesión a las doce horas con cincuenta y tres minutos, previa convocatoria que emitió a los integrantes del Tribunal Pleno para acudir a la próxima sesión pública ordinaria que se celebrará el jueves ocho de junio del año en curso, a la hora de costumbre.

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Luis María Aguilar Morales y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, quien da fe.



SUPREMA CORTE DE  
JUSTICIA DE LA NACIÓN  
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS